

{ OPINIÓN }

Quemar las naves

HERALDO MUÑOZ

LAS SEÑALES ERAN MALAS. No solo la elección presidencial venezolana era una competencia desigual, caracterizada por la inhabilitación de la candidata opositora más potente, María Corina Machado; por detenciones de colaboradores de la campaña del candidato definitivo, el exdiplomático Edmundo González; y por el incumplimiento de las garantías del gobierno de Nicolás Maduro para un proceso electoral limpio, según el Acuerdo de Barbados; sino porque el régimen no quería un monitoreo internacional serio de la elección.

Se canceló la invitación a la misión observadora de la Unión Europea, se deportó a dos senadores



ble, llamando a la transparencia de todas las actas de votación, al respeto a la soberanía popular expresada en las urnas, y a la verificación independiente de los sufragios antes de reconocer los resultados. Es también la posición, con matices, de Brasil, Colombia y México, ninguno de los cuales ha reconocido aún el resultado oficial.

ESTA POSTURA BUSCA una intermediación con el régimen venezolano, pero todas las señales son pesimistas. El CNE proclamó a Maduro en un acto donde no se presentó ni un acta de votación de mesa. Vencido el plazo que establece la ley, el CNE aún no provee las cifras desagregadas, lo cual configura un vacío constitucional.

La expulsión de los diplomáticos de Chile y de otros países desde Caracas, y el retiro de los propios de Santiago; la violenta represión de las protestas callejeras

que el régimen de Maduro confía en que puede vivir sin Latinoamérica; que, además, la oposición no tendrá fuerza ni ánimo para una movilización sostenida; que EE.UU. está ocupado en su propio complejo proceso electoral presidencial y que, considerando las sanciones a Rusia, necesita el petróleo venezolano en los mercados; y que puede sobrevivir comerciando y siendo respaldado por Rusia, China e Irán.

La expulsión de nuestro embajador y diplomáticos constituye un congelamiento de las relaciones bilaterales, aunque algo no demasiado sorprendente considerando la distancia política bilateral existente, la falta de cooperación de Venezuela en materia penal y en la repatriación de personas con órdenes de expulsión. Con todo, era necesario estar presente, insistir en nuestros objetivos, y mantener relaciones con todos los actores locales antes y durante el día de la elección.

Por último, en este ámbito no hay intervención externa. El régimen de Maduro está obligado jurídicamente a respetar el "derecho a la democracia", consignado

en el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana, y los derechos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y antes de otorgar reconocimiento, los países tienen la prerrogativa de evaluar los estándares democráticos y constitucionales de los cambios de gobierno.

CHILE DEBE MANTENER su postura y continuar coordinándose con otros países de la región para que se respete la voluntad popular manifestada en las urnas, a través de la publicidad y verificación independiente de las actas de votación. El panorama venezolano se ve oscuro, pero la esperanza en política es lo último que se pierde.

El rompimiento diplomático con países de la región sugiere que el régimen de Maduro confía en que puede vivir sin Latinoamérica".

chilenos que concurrían a acompañar la elección y a parlamentarios españoles, e impidió el ingreso de varios expresidentes latinoamericanos. Incluso, el expresidente de Argentina Alberto Fernández, invitado a observar las elecciones, fue "desinvitado" luego de que compartiera la inquietud del Presidente Lula de Brasil por la amenaza de Maduro de un "baño de sangre" si ganaba la oposición.

EL CONSEJO NACIONAL Electoral (CNE), controlado por el régimen, con una tardanza de horas explicada por un supuesto hackeo, atribuido, por cierto, a la oposición, comunicó cifras generales no creíbles y burdas, con tan solo un decimal, dando ganador a Maduro.

Desde un inicio, Chile lideró una postura firme pero razona-

ble, llamando a la transparencia de todas las actas de votación, al respeto a la soberanía popular expresada en las urnas, y a la verificación independiente de los sufragios antes de reconocer los resultados. Es también la posición, con matices, de Brasil, Colombia y México, ninguno de los cuales ha reconocido aún el resultado oficial.

Las amenazas de cárcel a los principales líderes, incluyendo María Corina Machado —quien se declaró "en la clandestinidad"—, y Edmundo González, se han multiplicado en las últimas horas. La comunidad internacional debe estar atenta para defender su integridad física y derecho a protestar pacíficamente.

El rompimiento diplomático con países de la región sugiere

Heraldo Muñoz fue canciller de Chile entre 2014 y 2018.